

La columna de...

MARÍA INÉS ALBORNOZ.

GERENTE COMERCIAL Y DE MARKETING DE SOLUNION CHILE

Proyecciones económicas para Chile en 2026

Chile enfrenta 2026 con un escenario macroeconómico más favorable que en años recientes. La inflación avanza hacia la meta, la inversión comienza a recuperar dinamismo y el contexto externo entrega mejores condiciones, particularmente por el impulso de los precios de los minerales y una mayor estabilidad financiera. Sin embargo, el principal desafío ya no parece estar en el acceso al capital ni en las condiciones macro, sino en la capacidad de convertir proyectos en actividad económica efectiva.

El Banco Central proyecta un crecimiento del PIB de entre el 2% y el 3% para 2026, con una inflación que alcanzaría el 3% durante el primer trimestre del año y una inversión que se consolida como motor del crecimiento, especialmente a través de la maquinaria y los equipos. Estas cifras configuran un escenario que, en el papel, es claramente más auspicioso que el de los últimos años.

No obstante, este entorno más favorable convive con un freno estructural que limita su impacto real: la permisología. Un reciente informe de JP Morgan advierte que cerca de US\$ 93.000 millones -equivalentes a un 25% del PIB- permanecen detenidos a la espera de aprobación ambiental. El diagnóstico es claro: el problema no es la falta de proyectos ni de financiamiento, sino la baja velocidad de ejecución.

La evidencia reciente refuerza esta idea. El Imacec de diciembre de 2025 creció 1,7% interanual, impulsado principalmente por el comercio, con un fuerte aumento en las ventas mayoristas de maquinaria y equipos. Al mismo tiempo, la minería registró una caída significativa, reflejando una recuperación desigual entre sectores. La economía avanza, pero lo hace con fricciones que impiden que el ciclo de inversión se traduzca plenamente en producción, empleo y encadenamientos productivos.

En minería, por ejemplo, la cartera de inversión proyectada para la próxima década supera los US\$ 100.000 millones, pero solo una fracción de esos proyectos tiene alta probabilidad de concretarse en el corto plazo. La suspensión de megaproyectos de hidrógeno verde por decenas de miles de millones de dólares evidencia las dificultades que enfrenta el país para materializar iniciativas de alta complejidad, incluso en un contexto macroeconómico más favorable.

El cambio de gobierno ha reactivado las expectativas de una agenda más proinversión y de reformas orientadas a agilizar los procesos de aprobación. Sin embargo, el desafío no está solo en acelerar permisos. Hacerlo sin fortalecer la coordinación institucional y la certeza jurídica podría trasladar la incertidumbre desde la etapa administrativa hacia la judicialización, prolongando aún más los plazos y elevando el riesgo para las empresas.

Desde la perspectiva de quienes participan en proyectos de inversión, los retrasos regulatorios no son solo un problema macroeconómico. Tienen efectos concretos sobre la planificación financiera, el cumplimiento de contratos y la continuidad operacional. Durante largos períodos, las empresas deben sostener obligaciones, compromisos y garantías, aun cuando los flujos esperados se postergan indefinidamente.

En este contexto, la gestión del riesgo comercial y contractual adquiere un rol cada vez más relevante. Instrumentos como los seguros de crédito y las garantías forman parte habitual de la estructura financiera de proyectos de inversión, especialmente en entornos donde los plazos se extienden y la incertidumbre regulatoria sigue presente. No como una solución al problema de fondo, sino como una forma de ordenar compromisos y reducir la exposición mientras los proyectos logran avanzar.

El 2026 abre una oportunidad para que Chile recupere tracción económica. Pero aprovecharla dependerá menos del entorno externo y más de la capacidad interna de destrabar proyectos, mejorar la previsibilidad regulatoria y permitir que la inversión -que hoy existe- se transforme efectivamente en crecimiento, empleo y desarrollo. Sin ese paso, el mejor escenario macroeconómico seguirá chocando con un límite conocido: la dificultad de ejecutar.